

Antofagasta, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Jonathan Rodrigo Velásquez Ramírez, alcalde de la comuna de Antofagasta, cédula nacional de identidad N° 12.837.996-7, domiciliado en calle Sucre N°220, oficina N°406, quien, interpuso recurso de protección en contra de Cristian Reyes Herrera, periodista, cédula nacional de identidad N° 16.629.252-2 y en contra de Consorcio Periodístico Norte Spa, RUT N°76.587.604-4, representada legalmente por Cristian Reyes Herrera, ya individualizado, domiciliados en calle Armando Moock N° 18, Gran Vía, Antofagasta, por la acción ilegal y arbitraria constituida por la columna de opinión pública en el sitio web de diario Antofagasta, con fecha 23 de marzo de 2023, solicitando eliminar dicha publicación, y además, en la misma sección, practicar las disculpas pertinentes, debiendo la misma, ser publicada.

Informaron las recurridas, instando por el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundó su acción constitucional, en la opinión publicada en la página web del Diario de Antofagasta, denominada "el bufón y el trono", estimando con ello, conculcado el derecho a la Honra, establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Cuenta que el día 23 de marzo del año en curso, mediante la plataforma del diario digital Antofagasta, se publicó una columna, bajo la denominación ya indicada, redactada por el periodista recurrido.

Detalló el contenido de dicha publicación: *"El bufón y el trono. Antofagasta necesita ser liderada por una persona preparada, tanto en lo profesional, humano, intelectual, psicológico y valórico, con un programa de*



trabajo claro, que sea capaz de dialogar con todos los actores, alcanzar acuerdos transversales y poner a la ciudad por encima de cualquier interés, revancha o gustos personales.

El bufón de arrellana en el trono, es el título de un interesante libro que reflexiona sobre los políticos populistas y las graves consecuencias políticas y sociales de la posverdad.

Con la imagen del bufón o payaso acomodándose al trono se aborda el fenómeno del auge de los líderes populistas, dispuestos a alcanzar el poder y perpetuarse en él, mediante el uso sistemático de la desinformación en redes sociales. Lo prioritario son los likes, aunque lo que en ellas se diga o exponga no tenga sustento en la realidad material.

Antofagasta está pagando caro y por millones el costo de elegir la popularidad (aunque sólo con un 9,38 % de votación real, 26.913 votos de un total de 286.950 inscritos en el padrón electoral) en vez de programas, proyecto, trayectoria o experiencia laboral y curriculum.

El nuevo fallo de la Corte de Antofagasta que costará más de 50 millones al municipio-es decir, al ciudadano de Antofagasta- por despidos injustificados que fueron anunciados por redes sociales en vez de seguir los conductos legales, es un ejemplo de ello". Continúa exponiendo que la publicación expresó: "Es momento de que sea quien sea la persona al frente, deje de lado los chistes, frases ridículas, los chismes y las peleas por internet, para ponerse a trabajar en la vida real acorde a lo que exige el cargo".

Señaló, que el señor Herrera, de manera ilegal y arbitraria denosta su imagen y labor como alcalde a la comuna, afectando gravemente su honor y honra, bajo el pretexto de abordar el fenómeno del populismo político, la desinformación y la posverdad.

Expuso, que la columna de opinión expresa



abiertamente que la comuna se ha visto perjudicada por una serie de inconductas que el recurrido le atribuye, sosteniéndose que carece de cualquier tipo de aptitud o cualidades para liderar la comuna.

SEGUNDO: Que informó por las recurridas, Loreto Alejandra Orrego Díaz, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Indicó, que no existe acto ilegal o arbitrario, ya que, El Diario de Antofagasta ejerce lícitamente la libertad de opinar e informar sin censura previa. En este efecto, citó el artículo 1° de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. En el mismo sentido, el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, resguarda dicho derecho. Incluso, aludió a normativa internacional, en concreto, el artículo 5 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 10 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 1° sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, por lo que se encuentra -dijo- amparada por tales normas.

Además, afirmó que en la columna de opinión, en ninguna parte se alude al recurrente, Jonathan Velásquez Ramírez, ni siquiera se menciona su nombre, sino que, lo que se efectuó, consistió en una opinión respecto a una administración municipal estimada como deficiente que, fue condenada por vulneraciones de derechos de diferentes actores sociales. Asimismo, sugirió los atributos que considera relevantes para establecer un liderazgo en la comuna, sin indicar en ninguna parte de ellas que el recurrente no las tenga. Sostiene que si el señor Velásquez considera que carece de los atributos indicados, malamente les puede responsabilizar, por cuanto en ninguna parte ha realizado tal afirmación, pero aún si ese fuera el escenario, obedecería a una opinión válida y apta de ser emitida, toda vez que un alcalde es una autoridad sometida



necesariamente al escrutinio público de los medios de comunicación social, en consecuencia, estimó actuar lícitamente, no conculcando garantía Constitucional alguna de las alegadas por el actor.

Respecto a la práctica de disculpas públicas a través del mismo canal, consideró que, quien se siente afectado por una opinión que no es de su agrado, o que considera errónea, no tiene derecho a exigir la eliminación de la publicación, sino que, debe escoger otra herramienta específica que entrega la Ley: El derecho de aclaración y de rectificación, pública y gratuita, contemplado en el Título V de la Ley N°19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, no siendo procedente lo solicitado por el recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.



QUINTO: Que, en mérito de las presentaciones, y los antecedentes incorporados, no es un hecho discutido que el recurrido Herrera, mediante la plataforma digital del Diario Antofagasta, el día 23 de marzo del año en curso, publicó una columna, titulada " El bufón y el trono".

Entonces, reconocida la publicación y el contenido de la misma, dable será establecer si con ella, se conculcó el derecho a la honra alegado por el actor.

SEXTO: Que, teniendo en consideración la publicación practicada junto a su contenido, se advierte que la opinión vertida en la página web del Diario Antofagasta, reflexiona sobre la base del fenómeno del auge de los líderes políticos populistas, dispuestos a alcanzar el poder y perpetuarse en él, mediante el uso sistemático de la desinformación en redes sociales. Es decir, efectúa una crítica social, aún, sin singularización del recurrente. Luego, sostiene que "Antofagasta está pagando caro", por elegir popularidad, evidentemente haciendo alusión directa del recurrente. Luego, hace referencia a causas judicializadas que han debido costear los ciudadanos de Antofagasta, para sostener, de modo genérico, que la comuna necesita ser liderada por una persona preparada, tanto en lo profesional, humano, intelectual, psicológico, con un programa de trabajo claro, que sea capaz de dialogar con todos los actores, alcanzar acuerdos transversales y poner a la ciudad por encima de cualquier interés, revancha o gustos personales. Continúa exponiendo, *"por lo pronto, dado que ya hay una administración instalada que se acerca a la mitad de su periodo, es preciso al menos enmendar el rumbo"*.

Así, no se advierte, en esta sede cautelar, de qué forma, las opiniones que se plasmaron en un diario digital de incumbencia local, impliquen denostaciones que afecten el honor que alega como conculcado el recurrente.

SÉPTIMO: Que, es necesario tener en consideración que la libertad de expresión no es sólo un derecho individual, sino, que se erige como un derecho social sobre



el que descansan las bases mismas de la convivencia democrática, pues, sin ella se inhibe la crítica social y se favorece la autocensura, lo que ciertamente resultaría reprochable. En efecto, serán circunstancias relevantes en esta ponderación la materia del contenido de la opinión vertida en el medio ya citado, su interés social, su capacidad de contribuir a la formación de una opinión pública libre, incidiendo, el carácter público o privado de la persona objeto de la información, así como el medio por el que se ha transmitido la información.

En nuestro sistema Institucional democrático, la libertad de opinión e información, además de ser un derecho fundamental de las personas, constituye una exigencia de la sociedad, de la cual son elementos indispensables el pluralismo, la crítica acerba y la tolerancia.

Además, la relevancia pública de la información está dada por la importancia o trascendencia de los hechos en sí o en virtud de la persona que lo realiza y la conveniencia o necesidad de su conocimiento por la sociedad. Así la ausencia de relevancia pública de la información emitida, determina la prevalencia del derecho a la honra sobre la libertad de opinión, que no necesariamente debe manifestarse de manera correcta o certera, es decir, incluso puede carecer de veracidad, no significando en todo caso, la conculcación de derechos que se pretende en la especie, ya que, los límites de la crítica permitida son más amplios en relación a una persona de relevancia pública en las actuaciones correspondientes a sus funciones de tal, por duras e infundadas que aparezcan, pesando en ellos la tarea de dar cumplida cuenta de sus actuaciones referentes al desempeño de las funciones públicas. En efecto, al situarse el actor, libre y voluntariamente como autoridad comunal, se expone, inevitable y deliberadamente, a la fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos, debiendo soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, pues, ello es menester



debido al pluralismo político, en la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales, se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación de la comunidad local.

OCTAVO: Que, finalmente, y no obstante lo razonado, debe consignarse que la libertad de expresión jamás podrá ser absoluta, y toda limitación debe respetar el contenido esencial de cada derecho, toda vez que, como se consagra en nuestra Carta Fundamental, si aquellas opiniones, pueden eventualmente ser constitutivas de delitos, deberán investigarse y juzgarse por la vía que corresponda, resultando inidónea la presente acción cautelar atendida su naturaleza de urgencia.

Incluso, el mismo articulado que sirve de sustento al actor permite, en la medida de que haya sido ofendido o injustamente aludido por algún medio de comunicación social, que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la Ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida, conforme a la normativa vigente, en consecuencia, necesariamente deberá rechazarse la acción de protección interpuesta, por estimar que no se ha vulnerado la garantía Constitucional contemplada en el número 4 del artículo 19.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, **SE RECHAZA, sin costas,** el recurso de protección interpuesto por Jonathan Rodrigo Velásquez Ramírez, en contra de Cristian Reyes Herrera, y de Consorcio Periodístico Norte Spa.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 1560-2023 (PROT)





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TJSCXFRTDXP

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Jasna Katy Pavlich N., Juan Opazo L. y Abogada Integrante Luisa Ida Cortes S. Antofagasta, treinta y uno de mayo de dos mil veintitres.

En Antofagasta, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TJSCXFRTDXP